

AÑO 1/No.19

10 de Mayo de 1983

CONTENIDO

- No queremos procónsules": López Fuentes
- Los Estados Unidos no entienden
- El suministro de armas, problema político
- Nueva denuncia de América's Watch
- "Somos un gobierno fuerte": Ríos Montt
- Necesitamos controlar a la población: jefe militar
- Nuevos impuestos provocan malestar
- Destacado economista critica política tributaria
- Obispos pusieron el dedo en la llaga
- Solidaridad de las Iglesias Europeas con Centroamérica
- Acciones insurgentes
- Restringen autonomía municipal
- Gobierno crea central sindical
- Matanzas, secuestros y detenciones masivas
- Campesinos a "aldeas modelo"
- "No robar, no mentir, no abusar"
- Tratos entre Donaldto Alvarez y el gobierno
- El MLN acusa de nuevo

'NO QUEREMOS PROCONSULES ': LOPEZ FUENTES

La designación de Richard Stone como embajador especial norteamericano para Centroamérica fue rechazada enérgicamente por las autoridades guatemaltecas.

"No conviene que países como Estados Unidos manden delegados, porque son como los procónsules que fungían al estilo de la antigua época romana", comentó el jefe del estado mayor del ejército, Héctor Mario López Fuentes.

Richard Stone, exsenador conservador por el estado de Florida, trabajó como agente del gobierno de Lucas García en sus frustrados intentos por mejorar la imagen de Guatemala en los Estados Unidos. Su nombramiento como embajador especial para Centroamérica ha sido cuestionada por grupos de congresistas republicanos.

El material ofrecido en este servicio de noticias de Enfoprensa puede publicarse con o sin indicación de la fuente. Agradeceremos el envío de recortes de lo publicado.

49 12.315

El general López Fuentes subrayó: "De los estadounidenses no recibimos ayuda de ninguna clase, por lo cual por lo menos que no vengan a causarnos problemas".

Mientras tanto, el líder del Frente Democrático Revolucionario, de El Salvador, Guillermo Ungo, también manifestó excepticismo ante la designación de Stone, de quien dijo que "no es la persona ideal" para buscar la paz en su país.

LOS ESTADOS UNIDOS NO ENTIENDEN

Los Estados Unidos "no pueden apreciar exactamente" lo que acontece en Guatemala, señaló el Secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, Gonzalo Asturias, al referirse al pronunciamiento del embajador norteamericano en el país, Frederick Chapin, en el sentido de que a la administración Reagan le gustaría que los tribunales de fuero especial dejaran de funcionar.

Gonzalo Asturias señaló que el "sistema político y social de Guatemala difiere del de los Estados Unidos", y que por ello dichos tribunales "son vistos desfiguradamente".

Los tribunales de fuero especial, creados por Ríos Montt en julio de 1982, han sido censurados unánimemente por organismos humanitarios, jurídicos y religiosos guatemaltecos e internacionales, por no respetar las mínimas garantías procesales establecidas en el Derecho.

EL SUMINISTRO DE ARMAS, UN PROBLEMA POLITICO

"Estados Unidos está ofreciendo seis millones de dólares en repuestos, armas y municiones, pero no hay dólares en Guatemala; por eso no se ha decidido la compra", manifestó recientemente el general López Fuentes, jefe del estado mayor del ejército.

El alto jefe militar señaló que la condición de venta al contado "es más que nada un problema político del momento, y no se sabe si ellos van a cambiar".

López Fuentes enfatizó que hasta el momento el ejército no ha necesitado el apoyo de los Estados Unidos, "lo que es muy positivo para Guatemala, que como país libre haga lo que le corresponda sin asesoría extranjera".

El Jefe del Estado Mayor informó así mismo que "Israel no ha cerrado las puertas para la venta de armas, y vende en cualquier momento", y que también Argentina y Corea pueden vender armas a Guatemala, además de dar préstamos para la compra de las mismas.

En marzo pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exhortó a los gobiernos del mundo a abstenerse de suministrar armas u otro tipo de asistencia militar al gobierno de Guatemala, en tanto persista en el país la violación de los derechos humanos.

NUEVA DENUNCIA DE AMERICA'S WATCH

America's Watch, asociación internacional defensora de los derechos humanos, pidió a la administración Reagan el cese inmediato a las ventas de equipo militar y la suspensión de toda ayuda al gobierno de Guatemala, después de realizar una investigación en este país.

En un informe emitido a finales de abril, la reconocida entidad humanitaria precisa: "aunque hombres civiles de todas las edades han sido asesinados por el ejército guatemalteco en grandes cantidades, las víctimas que más sufren son las mujeres y los niños; las mujeres son violadas antes de matarlas; los niños son estrellados contra paredes, ahogados, quemados vivos y asesinados a machetazos o a cuchilladas con bayonetas".

"Creemos, señala America's Watch, que las informaciones y declaraciones creíbles que recolectamos durante nuestra misión, no sólo contradicen las afirmaciones del Departamento de Estado acerca de una disminución en las violaciones a los derechos humanos, sino que también indican que las matanzas rurales han sido intensificadas y son aún uno de los elementos principales de la campaña de contrainsurgencia del gobierno del general Ríos Montt".

"SOMOS UN GOBIERNO FUERTE": RÍOS MONTT

"Yo no puedo decir que el 23 de marzo vamos a hacer elecciones", dijo Ríos Montt en su discurso del 8 de mayo, donde nuevamente fustigó a los políticos y afirmó que su gobierno es fuerte.

El jefe de gobierno respondió así a las reiteradas demandas que la semana pasada le hicieran los comités pro formación de partidos políticos, en el sentido de acelerar la democratización del país. Ríos Montt calificó de mentirosos a los políticos y los censuró por abrogarse "el derecho de hablar en nombre del pueblo que todavía no han consultado", y agregó que en marzo de 1984 no estarán aún funcionando los elementos jurídicos que garantizarían las elecciones.

El mandatario, que llegó al poder tras un golpe de estado en marzo del año pasado, expresó: "Estamos en contra de los gobiernos débiles, de los gobiernos que están sujetos a la tiranía de la prensa, de los comités, de las cámaras o de las asociaciones; nosotros no somos un gobierno débil".

Finalmente Ríos Montt señaló que no teme a los que compran asesinatos o instigan a oficiales para que den otro golpe de estado. "Yo sólo temo a Dios", enfatizó.

El discurso del general, uno de los más violentos de los últimos meses, fue interpretado por los observadores como una reafirmación de su línea política de fuerza, frente a las demandas de sus opositores y a las presiones internacionales.

NECESITAMOS CONTROLAR A LA POBLACION: JEFE MILITAR

Las autoridades militares se proponen crear bases militares en los 22 departamentos del país, mientras se muestran cautelosas en cuanto a la entrega de armas a las patrullas de defensa civil, según declaraciones formuladas el 6 de mayo por el jefe del estado mayor del ejército, general Héctor Mario López Fuentes.

"Necesitamos reforzar cada vez más el control no sólo territorial, sino de población; al haber presencia militar en toda la República, no habrá presencia subversiva", dijo Fuentes, al explicar la intención gubernamental de crear las nuevas bases militares, seis de las cuales fueron inauguradas recientemente.

Al ser preguntado sobre si el ejército va a entregar armas a las patrullas civiles, el alto jefe militar expresó: "Es una situación que necesita cierto estudio; es una organización que necesita mucha atención, mucho cuidado, mucha coordinación; se van a armar hasta un cierto límite, no en su totalidad, tendría que ser en forma selectiva...".

Los miembros de las patrullas civiles, organizadas por el ejército para prestar apoyo a las tareas de contrainsurgencia, fueron cuantificados por López Fuentes en 400,000; en marzo pasado, el ministro de la Defensa aseguró que eran 500,000.

Los abogados de la ciudad de Mazatenango, al suroccidente del país, denunciaron a finales de abril que el ejército forma estas patrullas con amenazas y coacciones, denuncia que ya anteriormente habían formulado organizaciones populares y humanitarias.

NUEVOS IMPUESTOS PROVOCAN MALESTAR

Ante el anuncio del nuevo paquete de impuestos al consumidor, sectores sindicales y populares mostraron su descontento y preocupación por la política del régimen, que, según afirmaron, "se propone dar muerte por asfixia económica a los sectores de población más empobrecidos".

Dirigentes sindicales señalaron que la iniciativa gubernamental "va dirigida a solucionar los problemas de disponibilidad monetaria del régimen a costa del pueblo, que además padece la crisis inflacionaria, el desempleo y el hambre".

El Ministro de Finanzas aseveró el 5 de mayo en conferencia de prensa que, "a pesar de que el paquete impositivo tendrá efectos inflacionarios verticalmente ascendentes, con él evitaremos la devaluación del quetzal" (moneda nacional en paridad oficial con el dólar, pero que en el mercado negro se cotiza a 1.42 por dólar).

En tanto, el general Ríos Montt, en su discurso dominical del día 8, defendió el nuevo paquete de impuestos, que presentó como alternativa a la tradicional evasión fiscal: "con algunos impuestos que no están pagando algunas instituciones, combatiríamos mejor el analfabetismo y esa marginalidad que ahora tiene que eliminarse a través de un siste-

ma impositivo". El mandatario agregó que "las desigualdades en los ingresos, las tensiones sociales, la violencia, la angustia y la desesperación es cosa de no pagar impuestos".

Por otra parte, el gobierno decidió suprimir los impuestos a las exportaciones de café, algodón y ganado, para tratar de estimular al sector agroexportador, cuyos ingresos, según datos del Banco de Guatemala publicados en los primeros días de mayo, descendieron durante los primeros meses de 1983 en un 22.9% en relación al mismo período del año anterior.

DESTACADO ECONOMISTA CRITICA POLITICA TRIBUTARIA

Un serio cuestionamiento a la política tributaria del gobierno de Ríos Montt formuló el licenciado Jorge González del Valle, quien fuera director del Banco de Guatemala durante los primeros nueve meses del régimen de facto.

El exfuncionario señaló que el Impuesto del Valor Agregado -IVA-, que entrará en vigor próximamente, tendrá repercusiones inflacionarias que afectarán duramente al consumidor, dada la crítica situación económica que atraviesa el país.

González del Valle criticó también las medidas gubernamentales del control de cambios y de esencialidades, que afectan la compra de materias primas y "se prestan a presiones y casos de corrupción administrativa"; y propuso, en cambio, "la creación de gravámenes tributarios a bienes suntuarios".

Finalmente, el destacado economista manifestó su oposición a la fondo monetarización de la economía del país, porque "el Fondo Monetario Internacional condiciona su financiamiento dentro de la política económica que sigue", la que calificó de desahuciada para nuestro tiempo. "Yo conozco a esa entidad, continuó el licenciado González, porque la boré en la misma, y por ello creo que mantiene una visión errónea al tratar de analizar los problemas de Latinoamérica de forma monetarista y no de una manera estructuralista, como pienso que debe actuarse ahora".

OBISPOS PUSIERON EL DEDO EN LA LLAGA

Leonidas Martínez, sacerdote guatemalteco y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, manifestó el 3 de mayo que la última declaración de la Conferencia Episcopal de Guatemala es "un documento valioso y valiente, en el que los obispos ponen el dedo en la llaga de los problemas nacionales. No sólo denuncian la violencia y la discriminación a que se ha sometido al pueblo, especialmente a la población indígena, sino que demanda reformas sociales urgentes".

El documento en cuestión emanó de la Asamblea Plenaria anual del Episcopado guatemalteco, celebrada durante la última semana de abril en la oriental ciudad de Esquipulas.

"El pronunciamiento episcopal se produce en momentos en que la crisis económica se ha descargado despiadadamente sobre los sectores más desposeídos, donde el espectro del hambre se ha generalizado, y cuando la violencia oficial ha llegado a límites nunca antes conocidos, para mantener un desorden social caracterizado por desigualdades sociales extremadamente injustas y contrarias a los principios cristianos", dijo el padre Martínez.

El sacerdote guatemalteco observó que el citado mensaje episcopal ratifica la "opción preferencial por los pobres" que la Iglesia Católica Latinoamericana hizo en Puebla, en 1978, "por lo que no podrá ser tildado de radicalista o de seguir consignas internacionales contra Guatemala". "Además, agregó, expresa sin duda el sentimiento del Papa Juan Pablo II, quien en su reciente visita a Guatemala se dio cuenta de la marginación a que es sometido el pueblo, católico en más de un 80%".

Finalmente, Leonidas Martínez subrayó: "Cuando los gobernantes manipulan de mil formas la fe del pueblo y hacen alarde de una honestidad más que dudosa, es importante que los obispos hayan dicho que no basta una campaña moralizadora si no va acompañada de acciones efectivas para superar la frustración de las personas, y que no basta hablar de honradez y servicio si las reformas necesarias no se realizan cuanto antes".

SOLIDARIDAD DE IGLESIAS EUROPEAS CON CENTROAMERICA

"En Europa, las Iglesias que quieran ser solidarias deberán instar a sus gobiernos a que consideren y apoyen la resistencia revolucionaria de los pueblos centroamericanos como un caso justo", afirmó en Holanda la Comisión Episcopal de Consulta para América Latina.

En un documento publicado recientemente, titulado "Cristianos en Centroamérica: nace la Iglesia de los Pobres", la entidad católica descubre la situación de desnutrición, enfermedad, persecución, tortura y muerte que amenaza la vida de los pueblos en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Refiriéndose a Guatemala, la Comisión Episcopal denuncia que "norteamericanos hermanos en la fe de Ríos Montt han reunido millones de dólares para ayudar al 'hermano Efraín' en su política de tierra arrasada y en la construcción de aldeas modelo", señalando que en esas aldeas es concentrada por el ejército la población sobreviviente de las masacres, y que las construcciones católicas son utilizadas como cuarteles.

El alto organismo eclesiástico pone de manifiesto que "quienes quieren ser eficientes en su solidaridad deberán ahora, pues, protestar ante el

gobierno norteamericano contra el apoyo militar a los gobiernos dicta-
toriales de Guatemala, El Salvador y Honduras".

ACCIONES INSURGENTES

Pese al despliegue de las fuerzas de seguridad, varias bombas propa-
gandísticas hicieron explosión el Primero de Mayo en diferentes zonas
de la ciudad capital, esparciendo volantes en los que el Partido Gua-
temalteco del Trabajo -PGT- denunció la represión gubernamental y la
falta de las libertades fundamentales que sufren los trabajadores.

El 8 de mayo, en el municipio de Tacaná, San Marcos, al occidente del
país, unidades insurgentes de la Organización del Pueblo en Armas --
-ORPA- emboscaron a una patrulla militar. El ejército reportó la -
muerte de un soldado en este hecho.

RESTRINGEN AUTONOMIA MUNICIPAL

Las oficinas de personal de las municipalidades pasarán a depender de
la Oficina de Servicio Civil, adscrita al ejecutivo, lo que implica -
una restricción más a la ya lesionada autonomía municipal.

La nueva medida gubernamental, sancionada por un decreto emitido el -
cuatro de mayo, entraña una mayor injerencia del gobierno en la admi-
nistración local, restando autoridad a las corporaciones.

La decisión del ejecutivo, que equivale en la práctica a la suspen-
sión total de la autonomía municipal, se produce en el contexto de la
"apertura democrática" ofrecida por el régimen de Ríos Montt.

A mediados de 1982, Ríos Montt nombró inconsultamente 324 alcaldes pa-
ra las otras tantas municipalidades en que está dividido el país, los
que, según la derogada Constitución, deberían ser elegidos por el vo-
to popular.

GOBIERNO CREA CENTRAL SINDICAL

"Entre el sindicalismo, el gobierno y la iniciativa privada no hay -
divorcio", declaró Ríos Montt el 10. de mayo, al clausurar el acto de
constitución de la Confederación Sindical de Guatemala, asociación -
obrero impulsada por el gobierno.

Por su parte, Juan Alfaro, dirigente obrero, afirmó que es muy difí-
cil que se vuelva a la actividad sindical, pues "son muchos los diri-
gentes desaparecidos; de algunos no se sabe dónde están, otros han e-
migrado, se han asilado por las necesidades. Esto nos obliga a par-
tir de bases muy limitadas..."

Alfaro aseguró que "es muy grave el problema del desempleo y subempleo, del alto costo de la vida, de inoperancia de las leyes, de falta de condiciones de plena garantía".

"Los obreros, continuó el sindicalista, no olvidan el secuestro masivo de 27 dirigentes, a plena luz del día, mientras celebraban una reunión de trabajo, y que muchos dirigentes obreros siguieron la misma suerte".

"Todo ello, finalizó Juan Alfaro, provoca un poquito de resistencia en algunos trabajadores y dirigentes a poder reestructurar una organización que en el pasado fue duramente golpeada, porque sienten que podría correr la misma suerte..."

MATANZAS, SECUESTROS Y DETENCIONES MASIVAS

Una matanza colectiva, ocho secuestros, la consignación de cinco personas a los tribunales de fuero especial y la detención de más de ochocientas, entre ellas menores de edad y mujeres, son el resultado de la violencia oficial del 2 al 9 del presente mes de mayo.

Fuerzas gubernamentales irrumpieron violentamente en la aldea San Miguel Tepajapa, en el occidental departamento de San Marcos, donde asesinaron a varias personas e incendiaron viviendas; numerosos aldeanos huyeron a las montañas. Aunque se carece de datos precisos, se cree que la matanza pudo haber sido de grandes proporciones.

El rector de la Universidad de San Carlos, doctor Eduardo Meyer, denunció el secuestro de tres estudiantes y una secretaria de esa universidad. También se denunciaron los secuestros de un campesino, un catedrático universitario, un médico y un trabajador de la Empresa de Telecomunicaciones -GUATEL-.

Las autoridades informaron también de 5 personas consignadas a los tribunales de fuero especial, acusadas de haber dado muerte al teniente del ejército Fernando Rodríguez Aguilar.

En tanto, más de ochocientas personas fueron aprehendidas por fuerzas combinadas de la policía nacional y el ejército, en redadas masivas realizadas en diferentes zonas de la ciudad capital. El coronel Mario Ramírez Ruiz, director de la Escuela de la Policía Nacional, expresó su convencimiento de que "al menos el 50% son maleantes", y reconoció que entre los capturados "hay mujeres y menores de edad".

Por otra parte, familiares de varios "desaparecidos" en la última semana de abril y primera de mayo, denunciaron que han recorrido los diferentes establecimientos policiales y militares, en donde se les niega toda información. El secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, Gonzalo Asturias, afirmó al respecto que el presidente de la República había girado "instrucciones precisas y claras a las fuerzas de seguridad, con el objeto de que sean aclarados los casos de personas que han desaparecido o han sido secuestradas por desconocidos".

CAMPESINOS A "ALDEAS MODELO "

Ciento diez campesinos, en su mayoría mujeres y niños, fueron capturados por el ejército en las montañas de Sequil, en el departamento de El Quiché, y concentrados en la "aldea modelo" instalada en el destacamento militar de Nebaj, en el mismo departamento.

Los campesinos, que hace varios meses se adentraron en las montañas - huyendo de los operativos militares llevados a cabo en esa zona, fueron capturados por los soldados tras un cerco de varios días.

Según la secretaría de relaciones públicas del ejército, los campesinos padecen desnutrición y otras enfermedades, especialmente gastrointestinales. La misma fuente indicó que los indígenas habían sido engañados por la subversión y fueron llevados montañas adentro, y que ahora se entregaron al ejército para acogerse a la "amnistía de reconciliación" vigente hasta el 30 de mayo.

"NO ROBAR, NO MENTIR, NO ABUSAR "

La participación de un ministro del gobierno de Ríos Montt en negocios corruptos durante la administración de Lucas García, y otros escándalos protagonizados por altos funcionarios en los últimos días, - han causado un fuerte impacto en la ciudadanía, que observa con creciente pesimismo la gestión del actual gobierno.

Según trascendió el 3 de mayo pasado, Julio Matheu, ministro de Economía, ofreció servicio de asesoría en el proyecto del "Anillo Periférico Nacional", el más grande negocio de corrupción de la administración luquista, que incluía la construcción de carreteras y autopistas a un costo de 1,600 millones de dólares, en el que el estado "perdió" 200 millones.

Por otra parte, el viceministro de Economía, Carlos Enrique Orantes, - disparó su arma contra una amiga de su familia, el primero de mayo.

Nicolás Buonafina, asesor presidencial, quien recientemente había acusado de corrupción al ministro de Economía, fue procesado formalmente por el Ministerio Público ante el Juzgado décimo de primera instancia de lo penal, por el delito de Difamación.

A todo ello se agregan las declaraciones del político Danilo Roca, - que reveló importantes detalles del golpe de estado de marzo del año pasado, haciendo señalamientos y críticas que cuestionan seriamente la posición de varios funcionarios del gobierno.

En tanto, prosigue la campaña de "no robar, no mentir, no abusar", - que el gobierno viene implementando desde hace varios meses en los medios de comunicación, con grandes desplegados en los periódicos y - amplios espacios en radio y televisión.

TRATOS ENTRE DONALDO ALVAREZ Y EL GOBIERNO

La residencia de Donaldo Alvarez Ruiz, ministro del Interior durante los regímenes de Laugerud García y Romeo Lucas (1974-1982), está arrendada por la Sección de Drogas y Narcóticos de la Policía Nacional. Según trascendió en fuentes del ministerio de Gobernación, el inmueble será comprado por el régimen al exfuncionario.

La citada residencia, dotada de subterráneos, fue utilizada como cárcel clandestina y centro de torturas durante los dos regímenes pasados. Al producirse el golpe de estado del 23 de marzo de 1982, fue asaltada por el pueblo, y en ella se encontraron más de 50 vehículos que habían sido robados.

Donaldo Alvarez, uno de los principales responsables de la represión y corrupción del régimen luquista, y que se encontraba fuera del país al producirse el golpe, no ha sido extraditado, pues, según funcionarios judiciales, se ignoraba su paradero. No obstante, a tenor de las informaciones difundidas, el ejecutivo mantiene relaciones de carácter patrimonial con dicho exministro.

EL MLN ACUSA DE NUEVO

Nuevos señalamientos contra el gobierno hizo el Movimiento de Liberación Nacional, al rechazar acusaciones formuladas en su contra el pasado 4 de mayo por el ministro de Gobernación, coronel Ricardo Méndez Ruiz.

El ultraderechista MLN señaló la negligencia del gobierno para "gestionar la extradición de los corruptos que abandonaron el país y para procesar a quienes gozan aquí de los dineros del pueblo".

Los emelenistas recordaron además que Méndez Ruiz fue jefe de seguridad de Lucas García durante su campaña electoral, y que en los sufragios de marzo del 82 presionó a votar por el general Guevara -candidato de Lucas- a los habitantes del norteño departamento de Alta Verapaz, donde fungía como comandante de la zona militar.

"El colmo, agregaron los emelenistas, es que ahora resulta hasta peligroso denunciar; tal es el caso de Nicolás Bounafina y Julio Matheu, en donde el primero denunció abuso y mentira de parte del segundo, ministro de Economía; y en vez de investigarse tales actos, el ministerio público procesa al denunciante".

Finalmente, los dirigentes emelenistas responsabilizaron al gobierno por eventuales actos de represión en contra de cualquiera de sus afiliados".

ENFOPRENSA es una entidad no lucrativa que ofrece sus servicios informativos sin cobrar una tarifa fija. No obstante, debido al aumento en los costos de impresión y en el número de destinatarios, solicitamos su colaboración solidaria, con la que esperamos poder mejorar y ampliar el servicio. Los envíos pueden hacerse a Leonel Petz, Apartado 19-648. México D.F.